



Bogotá, D.C., primero (1°) de abril de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2022-00104-00
ACCIONANTE: HENRY EDUARDO SÁNCHEZ REYES
ACCIONADAS: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
CLASE: ACCIÓN DE TUTELA

1. De conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, concordante con el artículo 1° inciso 1° del Decreto 1382 de 2000, y el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, se **ADMITE** la ACCIÓN DE TUTELA instaurada por **HENRY EDUARDO SÁNCHEZ REYES** con cédula de ciudadanía 1.066.096.796, en contra de la entidad **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, en procura de la protección de sus derechos fundamentales al nombre, a la defensa, al debido proceso, a la igualdad e identidad.

2. Por otra parte, se avizora que el aquí tutelante formuló una solicitud de medida provisional, encaminada a que se ordene a la entidad accionada *“suspender de manera inmediata el Auto No 039093 del 26 de agosto de 2021 y en consecuencia la Resolución 14729 del 25 de noviembre de 2021 (...), así mismo cualquier otro acto administrativo generado con posterioridad (...) por consecuencia por FAVOR se ordene como medida provisional mientras haya decisión de fondo, que mi cédula de identidad número 1066.096.796 se encuentre ACTIVA y/o VIGENTE”*.

3. La Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 312 de 2018 sintetizó tres exigencias básicas para que la adopción de medidas provisionales bien sea de oficio o a solicitud de parte, resulte procedente. Dichos presupuestos son los siguientes:

(i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (*fumus boni iuris*).

(ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (*periculum in mora*).

(iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.



4. En cuanto al primer presupuesto, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2020, lo definió *“como un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho o a la protección del interés público invocado como fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo”*. Aunque la misma Corte reconoció que en la fase inicial del proceso no es posible arribar a un nivel total de certeza sobre la violación de los derechos fundamentales en controversia, sí es necesario un estándar de veracidad apenas mínimo. Por tal razón, la solicitud de medida provisional *“debe estar soportada en las circunstancias fácticas presentes en el expediente y en apreciaciones jurídicas razonables, sustentadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”*.

5. Por su parte, en el análisis del segundo requisito (*periculum in mora*) es necesario sopesar el riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, ocasione un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. En palabras de la Corte, este requisito puede identificarse como *“un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso”*¹.

6. En la providencia en comento, la Corte precisó que el análisis de los dos presupuestos o requisitos debe ser conjunto. Precisamente, el segundo requisito (*periculum in mora*) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la simple apariencia de verdad (*fumus bonis iuris*) de la solicitud cautelar. Ello quiere decir que si no existe riesgo de que se ocasione un daño mayor al señalado en la demanda de tutela la medida debe ser denegada, aun cuando exista apariencia de buen derecho. En palabras de la Corte, *“la medida provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente con todos los elementos para tomar una decisión. El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se requiera la intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la sentencia final.”*

7. Por último, el tercer requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. La Corte indicó que *“si bien en esta fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del ciudadano. Evita*

¹ Ibídem



que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no supone un estándar universal y a priori de corrección, sino que exige una valoración que atienda las particularidades de cada caso concreto”.

8. Una vez leído el escrito de tutela de la referencia y analizado el material probatorio aportado al expediente, el Juzgado considera que se reúnen las condiciones necesarias para acceder, parcialmente, a la medida cautelar solicitada, sin que ello implique prejuzgamiento.

9. En cuanto a la apariencia de buen derecho, el Juzgado constata que el demandante dentro de las documentales anexas a la demanda, aportó registro del correo remitido a una dirección electrónica institucional de la entidad accionada (daruizr@registraduria.gov.co) allegando respuesta al auto que dio inicio a la actuación administrativa.

También aporta copia de un escrito de 20 de septiembre de 2021, mediante el cual se da “*Respuesta a Auto No. 039093 de 26 de agosto de 2021, expediente RNEC 108987*”, y en el acápite de notificaciones refiere los correos electrónicos para tal fin. Finalmente, allega copia de la notificación por aviso de 25 de noviembre de 2021, según el cual la entidad accionada indica que, ante la imposibilidad de efectuar notificación personal, se procede a notificar por aviso al accionante de la Resolución 14729 de 25 de noviembre de 2021, que dispuso anular el registro civil de nacimiento y la cancelación de la cédula por falsa identidad autorizado al señor HENRY EDUARDO SÁNCHEZ REYES.

De lo anterior, colige el Despacho que si existe una probabilidad, de que en efecto la entidad no haya efectuado una debida notificación del acto administrativo que ordenó cancelar el registro civil y la cédula del accionante, por lo que el libelo introductorio tiene vocación aparente de viabilidad.

10. En cuanto al segundo presupuesto, a juicio del Juzgado, la falta de documento de identidad vigente puede generarle de manera actual problemas al accionante en situaciones como por ejemplo, acceder en debida forma a los servicios de salud en caso de una urgencia, o involucrarse en problemas de índole policivo o migratorio; así entonces, con la finalidad de proteger de manera transitoria los derechos fundamentales, mientras se toma la decisión definitiva dentro del trámite, esta Agencia Judicial procederá a conceder la medida provisional de la referencia.



11. El Juzgado considera que el restablecimiento provisional del documento de identidad del accionante, es una medida que no ocasionaría un perjuicio grave e irreparable a la accionada.

Por consiguiente, se dispone:

1. Por el medio más expedito, comuníquese la iniciación de la actuación al Representante Legal de la accionada **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** y/o quien haga sus veces, a quienes se les enviará copia de la tutela y sus anexos para que dentro del término de un (1) día contado a partir de la fecha de su recibo, se refieran sobre todos y cada uno de los hechos relacionados en el escrito de ésta. Dentro del informe, deberá anexar también:
 - (i) copia íntegra del expediente administrativo, en el que se dio lugar a la emisión tanto del Auto No 039093 del 26 de agosto de 2021, como de la Resolución 14729 del 25 de noviembre de 2021, que presuntamente dispuso la cancelación de la cédula del accionante por falsa identidad
 - (ii) copia del Registro Civil de Nacimiento de la señora YENNY DEL CARMEN SANCHEZ REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.066.084.233.
 - (iii) copia del Registro Civil de Nacimiento de la señora CARMEN EVA SANCHEZ REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 60.298.823.
 - (iv) copia de la Resolución Nro. 7300 de 2021, emitida por el Registrador Nacional del Estado Civil.
2. Hágase la salvedad a la entidad requerida de que, de no ser el funcionario competente para el conocimiento de la acción de la referencia, se remita de manera inmediata al que ostente dicha facultad, informando tal situación al Despacho.
3. Notifíquese mediante comunicación este auto a la parte accionante.
4. Con el valor legal que le corresponda téngase como pruebas las documentales acompañadas con el escrito de tutela.



Con relación a los oficios solicitados en el escrito de tutela, los mismos ya se entienden decretados dentro de la documental solicitada en el numeral primero de esta parte resolutive

5. **DECRETAR MEDIDA CAUTELAR** a favor del señor **Henry Eduardo Sánchez Reyes** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.066.096.796, acorde con los argumentos expuestos en la parte motiva de este proveído; en consecuencia, se **ORDENA** a la entidad accionada que de manera inmediata, esto es, una vez notificado del presente auto; proceda a suspender los efectos de la **Resolución 14729 del 25 de noviembre de 2021** y en consecuencia, proceda **inmediatamente** a activar y restablecer la vigencia de la cédula de ciudadanía del accionante, mientras se resuelve de fondo el presente trámite constitucional a través de sentencia de primera instancia.

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura tendientes a la mitigación del COVID 19, los documentos, respuestas, requerimientos o memoriales, deben ser allegados a través de correo electrónico a la dirección admin10bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

A.O.-

Firmado Por:

Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 32af8d26717ae2d4f1205456010549a49f984866dfac6bd6bc154c18010b55e8
Documento generado en 01/04/2022 03:57:01 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>